



Hoy, la judicialización de la política en Argentina nos encuentra reunidos para combatir su institucionalización perversa y apoyar a Cristina Fernández de Kirchner en su defensa. Este método utiliza la manipulación selectiva del sistema penal para buscar la muerte política y jurídica de dirigentes populares, destruyendo su imagen pública e inhabilitándolos para su función, es lo que se define como *lawfare*. Pero al mismo tiempo salva de esa suerte a dirigentes funcionales al poder real, ese poder donde interactúan los poderes judicial, mediático, corporativo e internacional. Y esto, aun cuando hayan cometido delitos.

Es un nuevo "Operativo Cóndor" que se apoya en el Poder Judicial (que recordemos es el único que no deriva de la voluntad popular), en la reducción de funciones del Estado, en deslegitimar a funcionarios de gobiernos progresistas y siempre escudándose en una preocupación recurrente de nuestra sociedad como es la lucha contra la corrupción. Opera en momentos de alto costo político para la persona atacada, a través de la ubicación en espacios claves de abogados, jueces y fiscales vinculados al poder de turno; mediante la selección arbitraria de los casos de corrupción y a través del uso de los medios de comunicación monopólicos con los que se hace "periodismo de guerra". En este contexto, Cristina Fernández de Kirchner tiene 5 causas a la espera de juicio oral y otros tantos expedientes que aun no llegaron a esa etapa. En principio no se puede soslayar que el azar parece jugar caprichosamente a favor de que sus causas sean llevadas en un mismo juzgado de los 12 posibles. Sorteo mediante, la probabilidad infinitesimal para que esto suceda se hace realidad en su caso, e, ironías aparte, no es necesario esforzarse mucho para entender que el resultado escapa al sentido común. Su situación se explica mediante una historia soterrada y desconocida para el gran público europeo: al asumir en 2015 la Presidencia de la Nación, Mauricio Macri nombra por decreto, a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz como miembros de la Corte Suprema de Justicia y luego ambos se erigen en 2021 como presidente (cargo para el que se autovota) y vice de dicha corte. Esta Corte declara inconstitucional la Ley del Consejo de la Magistratura del 2006, permitiendo la designación de las 2/3 partes de los magistrados actuales que conforman el Poder Judicial. Y además reflota la figura del presidente de la Corte Suprema de Justicia como presidente también de la Magistratura. De esta forma se garantizan intervenir sobre los magistrados, proteger los puestos designados a dedo por Mauricio Macri, garantizar su propia impunidad y la de los suyos en la cámara Federal, y obviamente, continuar con la persecución de los dirigentes del campo nacional y popular. Pero además, cuando se habla de *lawfare* se corre el riesgo de dejar caer la palabra en territorio estrictamente jurídico, alejado de sus implicancias directas con la democracia y el bienestar de los pueblos. ¡Pero nada más lejos de nuestros intereses como ciudadanos!

Esta Corte recientemente benefició a las empresas de telecomunicaciones al suprimir su condición de servicio público, aplicó medidas cautelares que facilitaron la evaporación de 2 mil millones de dólares de las reservas del Banco Central y salvaron a Mauricio Macri en el juicio por espionaje del ARA San Juan (avalando de manera tangencial las tareas de inteligencia desplegadas sobre los familiares de los militares desaparecidos).

El lawfare también fue empleado para embestir contra Dilma Rousseff y Lula Da Silva en Brasil, y para desacreditar a Rafael Correa en Ecuador. Se trata entonces de un mecanismo puesto a prueba en toda América Latina y por eso, se encuentran unidos en una misma crítica, muchos de los países que conforman nuestra Patria Grande.

Agradecemos, por consiguiente, a nuestros hermanos y hermanas de Latinoamérica y a las y los compañeros de Unidas Podemos por apoyarnos en este momento en el que reivindicamos nuestros valores democráticos. Asimismo, instamos a la comunidad española y en general a la sociedad europea, a mirar más allá de sus fronteras y observar con recelo este tipo de operaciones que socava la legitimidad de los gobiernos democráticamente elegidos. Sabemos que la democracia es un valor profundamente arraigado en Europa, que no solamente es cuna sino fortaleza para defenderla, y por lo tanto esperamos que sean sensibles a un problema que también podría golpear sus puertas. Finalmente, hacemos un llamado al gobierno argentino para que canalice nuestra preocupación, y arbitre los medios necesarios para fortalecer nuestras instituciones, acabe con el monopolio informativo, facilite la pluralidad de voces y garantice que nuestra justicia sea un poder independiente y sinónimo de transparencia y honorabilidad.

Por todo esto decimos alto y claro... en un solo grito: TODXS CON CRISTINA!